

C.A. de Santiago

Santiago, trece de junio de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En estos autos Rol C-5462-23 del Primer Juzgado Civil de Santiago, juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios, caratulados “Calderón con Fisco de Chile”, por sentencia definitiva de primera instancia de seis de noviembre de dos mil veintitrés, la señora jueza titular del referido tribunal resolvió:

I.- Rechazar las excepciones opuestas por el demandado.

II.- Acoger la demanda y condenar al Fisco de Chile a pagar al actor la suma de \$50.000.000, más los reajustes e intereses que indica.

III- No condenar al demandado a pagar las costas.

En contra de esta decisión la demandada dedujo recursos de casación en la forma y apelación, y el demandante recurso de apelación.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.**

**Primero:** Que la nulidad adjetiva se sustenta en la causal prevista en el artículo 768 N° 6 del citado Código de Procedimiento Civil, esto es por haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, pues estima que la sentenciadora, al acoger la demanda, no consideró que previamente existió una sentencia definitiva firme entre las mismas partes, por el mismo objeto y la misma causa, la cual rechazó la demanda al acoger la excepción de prescripción extintiva de la acción, decisión que produce el efecto de cosa juzgada, de modo tal que la excepción opuesta por su parte debió acogerse y como consecuencia de ello rechazarse la demanda.

Expone que el demandante, Luis Calderón García, dedujo demanda civil en contra del Fisco de Chile en el proceso civil seguido ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-1890-2006 caratulado “Salgado y otros con Fisco”, por los daños morales causados por los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHMCE

mismos hechos en que funda el libelo de autos, acción que fue desestimada por sentencia de 5 de julio de 2011 al ser acogida la excepción de prescripción del artículo 2332 del Código Civil opuesta por el Fisco, la que fue confirmada por esta Corte en los autos Rol N° 7649-2011 por fallo de 19 de enero de 2014 y luego desestimado el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema en la causa Rol N° 7888-2014 por sentencia emitida el 19 de noviembre de 2014.

Agrega que tanto en dicha demanda como en la de autos se interpusieron iguales pretensiones indemnizatorias, basadas en los mismos hechos -y también fundada en las normas internacionales, constitucionales y legales que constituyen el estatuto de los derechos humanos y en aquellas que establecen los sistemas de responsabilidad del Estado-, las que fueron conocidas y resueltas mediante sentencia definitiva y ejecutoriada que declaró prescrita la acción.

Por ello estima que en el caso de la especie se dan los supuestos exigidos por la ley, doctrina y jurisprudencia que habilitan para acoger la excepción perentoria de cosa juzgada y que, en atención a su mérito, debió ser acogida por el tribunal de primera instancia, y haber decidido el rechazo total y absoluto de la demanda de autos, por cuanto esta se ha construido sobre la base de hechos y calificaciones jurídicas que ya han sido rechazados en todas sus partes, por una sentencia judicial previa que se encuentra firme y ejecutoriada.

Manifiesta que la sentencia definitiva ejecutoriada ya dictada en el proceso anterior, que declaró la prescripción de la acción patrimonial indemnizatoria, produce la excepción de cosa juzgada respecto a la demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile impetrada en autos, pues conforme con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se da la triple identidad necesaria, a saber, identidad legal de personas, de cosa a pedir y de causa de pedir, máxime si los hechos en que se funda una y otra demanda son idénticos. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHMCE

Aduce en cuanto al perjuicio exigido como requisito de la nulidad del fallo, que este se verifica por cuanto la sentencia de primera instancia rechazó la excepción de cosa juzgada, por considerar, erróneamente, que la cosa juzgada alegada contraría el derecho internacional y la necesidad de reparación a todo evento, lo que produce un evidente perjuicio al Fisco de Chile pues la decisión atacada fue dada contra otra pasada en autoridad de cosa Juzgada, que fue alegada y probada en juicio, a consecuencia de lo cual al rechazar la excepción, condenó al demandado al pago de \$50.000.000 a favor del actor, por lo que el vicio ha influido sustancialmente en lo resolutivo del fallo.

**Segundo:** Para la adecuada resolución del asunto propuesto es del caso señalar los antecedentes que constan de autos:

- a) El demandante de esta causa, don Luis Alberto Calderón García, acciona para obtener el pago de indemnización por daño moral por la suma de \$200.000.000, más reajustes e intereses, según demanda interpuesta con fecha 29 de marzo de 2023, fundada en las torturas, vejámenes y otros trato inhumanos y degradantes a los que fue sometido por agentes del Estado, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 1 N° 4.008. Señala que a la fecha de su detención por militares -11 de septiembre de 1973- era militante del Partido Comunista de Chile y empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, ubicada en la comuna de Puente Alto y que fue golpeado salvajemente por sus captores y luego traslado hasta el Regimiento de Puente Alto donde quedó en calidad de incomunicado, siendo nuevamente torturado y el 19 de septiembre fue ingresado al Estadio Nacional donde se mantiene en calidad de incomunicado y es nuevamente interrogado bajo torturas. El 9 de noviembre del citado año es ingresado al Campo de Concentración de Chacabuco, ubicado en pleno desierto de la zona norte donde se mantiene hasta octubre de 1974, para ser trasladado al campo de prisioneros de Puchuncaví, recinto a cargo de la Armada de Chile ubicado en la Quinta región hasta el 4 de noviembre de esa anualidad y luego



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHXMCE

trasladado hasta el campo de Prisioneros de Tres Álamos a cargo de Carabineros de Chile, donde obtiene su libertad el mismo días, saliendo al exilio en el año 1976 con destino a Canadá. Demanda daño moral por la responsabilidad que atribuye al Estado la que emana de la Carta Fundamental así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ya que las torturas sufridas constituyen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por lo que se generó responsabilidad internacional del Estado de Chile, de la que deriva la obligación de reparar, obligación que encuentra su fuente en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura. Agrega que incluso antes de la actual Constitución, la jurisprudencia y leyes especiales desarrollaron el principio general de que el Estado debe responder por los perjuicios causados a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos. Cita los fundamentos del derecho Internacional, jurisprudencia y doctrina sobre la materia.

- b) El demandado al contestar el libelo pretensor opuso la excepción de cosa juzgada sobre la base de lo fallado en la causa Rol C 1890-2006, seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, juicio en que por sentencia de primer grado se acogió la excepción de prescripción de la acción civil interpuesta por el mismo demandante e idénticos hechos, concurriendo la misma causa de pedir y objeto pedido, ya que demandó al Fisco de Chile por la supuesta responsabilidad extracontractual imprescriptible y objetiva de este por los apremios ilegítimos o torturas que habría sufrido en manos de los agentes del Estado. Cita los presupuestos de la excepción que alega, recurriendo a doctrina y jurisprudencia que avalan su tesis. Afirma que se configura la triple identidad, siendo ésta un modo de extinguir las obligaciones, insistiendo en la identidad de la cosa pedida, cuál es, la indemnización por daño moral por responsabilidad civil extracontractual objetiva e imprescriptible el Fisco de Chile y la causa de pedir también es la misma, esto es, la detención de que fue objeto, prisión política y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHMCE

torturas que habría sufrido el actor durante aproximadamente 12 meses desde septiembre de 1973 a noviembre de 1974, que padeció en manos de agentes del Estado. Cita también jurisprudencia; agrega que la norma del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es solo aplicable a la Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo no impide la aplicación del derecho interno nacional de la institución de la prescripción en Chile. Además, la cosa juzgada es también una institución reconocida por el derecho internacional, consagrada como principio general del derecho reconocido por las naciones civilizadas y Cortes Internacionales, sin que en este caso se verifique la hipótesis de la denominada cosa juzgada fraudulenta y que la Corte Suprema enfrentada a sentencias de cortes internacionales ha reconocido el valor de la cosa Juzgada, concluyendo que los tribunales no pueden revivir proceso fenecidos.

- c) Al responder el traslado que le fuera conferido la parte demandante sostiene, en síntesis, que lo alegado corresponde a normas del derecho interno que atentan contra el cumplimiento de obligaciones internacionales y en contra del acatamiento de los tratados internacionales que regulan la reparación integral de las víctimas y las normas del *ius cogens*.

**Tercero:** En relación a la excepción alegada la sentenciadora en el motivo Sexto de la decisión atacada, para rechazarla argumenta que “...si bien en la causa seguida ante el 14° Juzgado Civil -antes individualizada- el juez de la época desechó la demanda, tal decisión no se pronunció sobre el fondo del asunto sometido a su decisión; y en tal sentido, una excepción formal no deja de serlo aunque se plantee como defensa sustantiva, resultando evidente que lo que se realizó en el proceso primitivo fue una apreciación de carácter adjetivo sobre la oportunidad de la acción; pero no en términos sustantivos sobre el fondo del asunto, es decir, no se dio una respuesta a la demanda de protección de los derechos sustantivos incoada por las víctimas.



*Sin perjuicio de lo anterior, y aun en el caso de considerarse que no es posible establecer una distinción entre cosa juzgada formal y/o material, por no contemplarlo expresamente el legislador interno. Lo cierto es que a juicio de esta sentenciadora, tampoco se cumple en la especie con la triple identidad requerida, dado que no basta una mera comparación entre lo pedido pretéritamente y lo demandado en el caso de autos, sino que se debe realizar un examen de fondo, sobre la base de lo juzgado, es decir, sobre el objeto del proceso”.*

*Agrega en el mismo fundamento que “Por lo tanto, el examen que debe realizarse respecto de una posible identidad entre dos procesos, se extiende más allá del análisis de los bienes jurídicos cuya protección se solicitó, sino que necesariamente debe extenderse a la resolución adoptada en términos cualitativos y cuantitativos en la sentencia primigenia”.*

*Concluyendo la juzgadora señalando: “Ahora bien, como en la sentencia dictada en el 14° Juzgado Civil no hubo un pronunciamiento de fondo relativo a esclarecer la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos reclamadas por los demandantes ni su pretensión reparatoria, a juicio de esta magistratura, no se satisface uno de los presupuestos de admisibilidad de la defensa planteada, a saber, “la identidad de cosa pedida” en los términos señalados precedentemente, circunstancia que obsta a que se configure la triple identidad requerida para que opere la excepción en estudio”.*

**Cuarto:** Que sin perjuicio de lo razonado por la juzgadora de primer grado, la excepción de cosa juzgada debe ser igualmente desestimada por cuanto el demandado la reclamaba únicamente sobre la base de normas internas las que atentan contra el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado y contra del acatamiento de los tratados internacionales, las que son obligatorias por aplicación del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece claramente que la soberanía reconoce como



limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En efecto, la interpretación pretendida infringe las normas de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que *“El Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales”*, pues al hacerlo, la conclusión alcanzada -no reparación en este caso- necesariamente será contraria al sistema internacional de los derechos humanos, cuando son vinculantes los instrumentos de derecho internacional, siendo obligación del Estado respetar y promover los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra obtener las indemnizaciones de orden patrimonial, como es la que acá se demanda, por cuanto el derecho a la reparación integral de las víctimas y sus familiares importa el resarcimiento de todo daño al amparo del derecho internacional de los Derechos Humanos por sobre las normas internas que lo harían imposible.

**Quinto:** Que a lo anterior se agrega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 29 de noviembre de 2018, en el fallo Órdenes Guerra y Otros con el Estado de Chile, estableció *“La Corte destaca que, tal como reconoció el Estado, el hecho ilícito que generó su responsabilidad internacional se configuró por el rechazo, por parte de los tribunales de justicia nacionales, de acciones civiles intentadas por las víctimas de reparación de daños ocasionados por actos calificados como crímenes de lesa humanidad, con base en la aplicación de la figura de la prescripción, alegada como excepción por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco chileno. Tal criterio impidió que los tribunales analizaran en su mérito la posibilidad de determinar una indemnización por los daños y perjuicios morales ocasionados a las víctimas, restringiendo la posibilidad de obtener una reparación justa. Es decir, no hay duda de que en este caso las violaciones de derechos reconocidos en la Convención se produjeron por una serie de decisiones de órganos judiciales del Estado que impidieron a las víctimas acceder materialmente a la justicia para reclamar su derecho de obtener una*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHXMCE

*reparación.” Agrega dicho fallo “La Corte hace notar que las acciones civiles intentadas por las víctimas han sido objeto de decisiones que, hoy día, tienen carácter de cosa juzgada. En este sentido, es claro que el instituto de la cosa juzgada es un principio garantizador que debe ser respetado en un Estado de derecho”. Pero dispuso igualmente dejar sin efecto las decisiones cuestionadas agregando el citado fallo que: “En el presente caso, la denegación de justicia surgió por una interpretación judicial contraria a la Convención y la consecuencia de la situación jurídica infringida es que, al día de hoy, las víctimas no han podido hacer efectivo su derecho a reclamar, y eventualmente recibir, indemnizaciones por perjuicios morales alegados por la vía de una determinación judicial. De ese modo, la medida de restitución consecuente con ese daño podría ser disponer que el Estado les garantice el acceso a un nuevo recurso rápido y efectivo de carácter judicial para subsanar dicha situación o, en su defecto, algún mecanismo alternativo que cumpla con esa necesidad.”*

En el caso que se revisa la presente causa se encuentra en tramitación y ello posibilita acceder a la reparación que demanda el actor como víctima de torturas y trato denigrante por agente del Estado, motivo por el cual corresponde rechazar la excepción de cosa juzgada, aun cuando este tribunal no comparte lo razonado en el motivo Sexto de la decisión de primer grado, por cuanto conforme a lo reflexionado en este fallo la cosa juzgada no se verifica, careciendo la citada reflexión de influencia en lo resolutivo del fallo que se revisa.

**Sexto:** Que el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos establece como obligaciones para los Estados partes las de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce. Por consiguiente, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados partes, las consecuencias o efectos jurídicos de estas obligaciones son la exigibilidad inmediata de respeto de los derechos humanos y en el plano individual la tiene frente a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna. En



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHMCE

consecuencia, la obligación de respetar dicho ejercicio y goce, exige al Estado y a todos sus agentes abstenerse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana.

Por otro lado, y vinculado con lo anterior, la obligación de garantizar exige al Estado el deber ineludible de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción, siempre estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra

En esta materia la Corte Suprema en el fallo emitido en la causa Rol N° 149.250-20, resolvió *“Que, en este orden de ideas, de acuerdo al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Estado debe cumplir con las normas sobre derechos humanos y al implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de Convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia. Sin que ninguna norma del derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad”*.

El máximo tribunal añadió a sus reflexiones *“Que es un principio general de derecho internacional, el que los Estados se obligan a cumplir los tratados de buena fe. Por lo que el Estado no puede descansar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, porque se lo impide su legislación interna (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), dado que tiene que observar las*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHXMCE

*disposiciones del tratado en toda su integridad. Máxime si el tratado a aplicar ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento para su promulgación vigente” Concluyendo que “Que la importancia de los razonamientos efectuados es que permiten aseverar que, al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al derecho internacional de los derechos humanos”.*

**Séptimo:** Que en la misma línea de los que se viene razonado, este Tribunal en la causa Rol N° 4145-2019, resolvió igualmente rechazar la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco de Chile, fundado en que *“la Corte Suprema ha recordado que en el Caso Velásquez Rodríguez con Estado de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo que las obligaciones antes citadas implican que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. (SCS de 13 de octubre de 2022, Rol 104.558-2020 ya citada). Lo anterior es así, porque la efectividad de los sistemas internacionales de Derechos Humanos depende de la recepción de sus fuentes en el derecho interno y, en el caso de nuestro país, sus condiciones han sido definidas autónomamente por el constituyente, al*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHMCE

*establecer la jerarquía de los compromisos internacionales en el artículo 5°, inciso 2°, de la Carta Fundamental”.*

*La citada sentencia expresa también que “...cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sujetos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe hacer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana’ (Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 16 de septiembre de 2006)”.*

**Octavo:** Que, en consecuencia, efectuado el control de convencionalidad para este caso en concreto, resulta evidente que la excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, carece de relevancia, por cuanto se trata de una institución que se aparta de las disposiciones imperativas inherentes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, razón la cual la excepción opuesta únicamente en la regla interna del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no puede ser acogida, debiendo primar la normativa internacional citada que impone al Estado de Chile el deber de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos que reclama el actor.

**Noveno:** Que se tiene además presente que en diversas sentencias la Corte Suprema, ( Rol N° 36.319-19, N° 104.558-20 y N° 14.4348-22 y,) ha sostenido que “no se desconoce aquí la validez y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHMCE

*legalidad de los fallos anteriores que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino sólo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamientos consagrada en el citado artículo 177, norma interna de carácter meramente legal, debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior.”*

**Décimo:** Que conforme se viene razonado, el recurso de nulidad por la causal alegada debe ser rechazado.

## **II.- En cuanto a los recursos de apelación.**

De la sentencia en alzada, se eliminan los acápites quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del fundamento Sexto,

### **Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

**Undécimo:** Que, para desestimar la excepción de cosa juzgada, este Tribunal tiene presente lo decidido por Corte Suprema en el fallo emitido en la causa Rol N° 149.250-20 y lo razonado en los considerandos Cuarto a Décimo de la sentencia de casación. En el contexto del derecho internacional de los Derechos Humanos es obligación del Estado no solo prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena, sino también la reparación integral de los daños producidos a las víctimas de delitos de lesa humanidad y a sus familiares.

Como ya se dijo, la interpretación pretendida por el demandado infringe el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en tanto prevé que *“El Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales”*, pues al hacerlo contraria al sistema internacional de los derechos humanos, que obliga al Estado respetar y promover los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra obtener indemnizaciones de orden patrimonial,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHXMCE

como es lo pretendido por el demandante. Por ello, aplicar la excepción de cosa juzgada haría primar las normas internas haciendo imposible la reparación demandada.

**Duodécimo:** Que, en cuanto al daño moral fijado por el tribunal de primer grado, se estima que la evaluación es proporcional al perjuicio acreditado en autos por el actor, conforme al mérito de la prueba documental aportada, por lo cual la sentencia no será enmendada en relación a su *quantum*.

Para lo anterior se tiene presente que el demandante no cuestionó lo reflexionado en el fundamento Décimo quinto del fallo de primer grado, esto es, considerar en el monto del daño moral las sumas pagadas al actor al amparo de las leyes de reparación, razonamiento que aun cuando este Tribunal no comparte, forma parte del contenido del fallo, pues corresponde a una de las peticiones subsidiarias del demandado, expresamente acogida por el tribunal de primer grado. En efecto, en su apelación el actor únicamente argumenta en torno a la prueba rendida para acreditar el daño moral, solicitando a este tribunal se regule la indemnización por tal concepto en una suma superior.

En el contexto descrito, los antecedentes fácticos asentados en los motivos Décimo tercero, Décimo cuarto y párrafo primero del fundamento Décimo séptimo de la decisión que se revisa, resultan suficientes para concluir que la indemnización por daño moral, en la suma fijada por el tribunal, se ajusta prudencialmente al mérito del proceso.

**Décimo tercero:** Que estimando que el demandado litigó con motivo plausible, no corresponde imponerle el pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en la norma legal citada y en los artículos 186 y siguientes y 765, 766 y 806 del Código de Procedimiento Civil **se declara** que:

I.- Se **rechaza**, sin costas, el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada contra la sentencia de seis de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHXMCE

noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-5462-2023.

II.- **Se confirma** la referida sentencia.

Se previene que la abogada integrante señora Paola Herrera, confirma la sentencia en alzada sin compartir lo señalado en el segundo acápite del fundamento Duodécimo de este fallo.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra señora González Troncoso.

N° 18.750-2023 Civil.

Pronunciada por la **Cuarta Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jessica González Troncoso, e integrada por el Ministro (S) señor Fernando Valderrama Martínez y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHXMCE

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jessica De Lourdes Gonzalez T., Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, trece de junio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a trece de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YSZWXXHMCE